



ENSAYO CIENTÍFICO

EL CONFLICTO MINERO Y LAS RAZONES SUBYACENTES EN EL CASO DE TÍA MARÍA/LA TAPADA EN LA PROVINCIA DE ISLAY-AREQUIPA

THE MINING CONFLICT AND UNDERLYING REASONS IN THE CASE OF TÍA MARÍA / LA TAPADA IN THE ISLAY-AREQUIPA PROVINCE

Dr. Luis Freddy Vilcatoma Salas*

* Profesor de Educación Secundaria, Magister en Educación con mención en Planificación Educativa, Doctor en Educación y Posdoctorado en Ética y Filosofía Educativa.
luisfreddy2006@hotmail.com

RESUMEN

Una forma alternativa de entender la problemática del conflicto minero en el valle de Tambo provincia de Islay en Arequipa, es enfocarla con un marco teórico diferente al del positivismo, que permita dar cuenta de esta realidad como una totalidad compleja o formación social, donde la resistencia de los pobladores a la explotación minera de la empresa Southern Copper sea explicada por un conjunto de factores endógenos de dirección y dominio que dan vida a la racionalidad identitaria de la población que vive de la agricultura.

Palabras clave.- Totalidad social, formación social, hegemonía, sociedad civil, Estado.

ABSTRACT

An alternative way of understanding the problem of the mining conflict in the Tambo Valley of Islay province in Arequipa is to approach it with a theoretical framework different from that of positivism, which allows us to account for this reality as a complex totality or social formation, where resistance from the inhabitants to the mining exploitation of the Southern Copper company, be explained by a set of endogenous factors of direction and dominance that give life to the identity rationality of the population that lives from agriculture.

KEYWORDS: Social totality, social formation, hegemony, civil society, State

I. INTRODUCCIÓN

Islay es una de las ocho provincias de la Región Arequipa-Perú creada por Ley del 19 de diciembre del año 1862; cuenta con 06 distritos: Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía, La Punta de Bombón, Mollendo e Islay (Matarani) con su capital ubicada en la ciudad de Mollendo; todo ellos distritos en la franja costera del Perú. Tiene una población total estimada en 53,180 habitantes en una superficie de 3.886.03 km² donde se desarrollan una variedad de actividades económicas en el campo de la agricultura, pesca, comercio, servicios y turismo. En cuanto a sus recursos naturales, estos se distribuyen de la siguiente manera: Área agrícola del valle Cocachacra, Dean Valdivia, La Punta de Bombón, Mejía): 17,580 hás. con buena calidad de suelos aptos para la agricultura y ganadería. Área agrícola de quebrada: 800 hás. con franjas angostas y accidentadas. Área de lomas: 39,200 hás. para el pastoreo. Área de pampas eriazas: 306,000 hás. de las cuales 138,900 hás. aprovechables para la agricultura. Área hidromórfica y salinizada: 5,100 hás.

La explotación minera que quiere impulsar la Southern Copper comprende la explotación en un lugar en el distrito de Cocachacra denominado como La tapada (425 millones de toneladas de cobre oxidado, a 350 msnm) y Tía María (225 millones de toneladas de cobre oxidado, a 570 msnm) que generaría (la explotación) más de US\$ 273 millones el año para Arequipa, por concepto de regalías y canon, de los cuales supuestamente US\$ 30 millones sería para el distrito de Cocachacra; con la particularidad de que La Tapada quien tiene la ley del cobre más alta que Tía María se encuentra a menos de 3 kilómetros de la zona agrícola del valle de Tambo, muy cerca de El Fiscal y aproximadamente a 6,2 km de la ciudad de Cocachacra (100 msnm). Se informa también que esta explotación minera tendría un impacto en el empleo de la siguiente manera: 13,000

puestos de trabajo: 9,000 durante la construcción y 4,800 durante la operación (600 directos y 4,200 indirectos).

Es en este espacio provincial donde desde el año 2011, año en que se tuvo que paralizar el proyecto por observaciones al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) durante el segundo gobierno de Alan García, se viene librando un sostenido y violento conflicto entre la población del valle de Tambo y la empresa minera SOUTHERN COPPER CORPORATION por la explotación de cobre en los lugares denominados Tía María y La Tapada. Un conflicto que en términos generales desde el pensamiento mediático ha tenido y tiene una interpretación con una base epistemológica común: el positivismo y empirismo provenientes tanto de la inteligencia de la empresa minera, del Estado como de un sinfín de opinólogos locales y regionales tanto en el sentido de cuestionar la inversión minera como de defenderla. En este caso se trata, por el contrario, de intentar un nuevo discurso explicativo apoyado en otros horizontes epistemológicos como la teoría crítica, el «postestructuralismo» y el «neoestructuralismo».

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración del presente ensayo se ha puesto en ejercicio el método lógico en el marco del paradigma crítico mediante el análisis, la síntesis y la comparación de información escrita y verbal, así como la observación, en relación a los ejes problemático-temáticos adoptados; contrastando datos de la realidad y relacionando reflexivamente la teoría con la práctica social. En cuanto a los métodos específicos e instrumentos se ha recurrido a la revisión, organización y sistematización bibliográfica teórica y noticiosa, la consulta digital en el internet y la entrevista con algunos testigos directos del conflicto.

III. RESULTADOS

La realidad del valle de la provincia de Islay no es una realidad ontológicamente escindida, cosificada y a-centrada como la describe y cosifica el positivismo sino, todo lo contrario, una realidad articulada en un todo relacional desembarazado (abierto), de estructura económica (material) y superestructura compuesta por sociedad civil, sociedad política (Estado), con un vínculo orgánico representado por quienes conocen y manejan, en la dimensión de lo público y lo privado, el conocimiento, la información, la tecnología y la ideología (investigadores, profesionales, técnicos, periodistas, alcaldes, funcionarios, etc.). Esta articulación es la que en su totalidad integrativa, compleja y conflictiva vamos a denominar como formación social (otra denominación es la de «bloque histórico» gramsciano).

La formación social en la provincia de Islay es una formación que tiene un centro organizador históricamente constituido por múltiples factores que tienen que ver con la formación social nacional y subnacional (Arequipa) donde domina el capital grande y pequeño y su lógica expansiva diferencial y jerarquizante (ciudades mayores-menores, capital-trabajo) con relaciones de subsunción formal (articulación capitalista dominante con relaciones no capitalistas) y real (relaciones enteramente capitalistas). Ese centro organizador es la agricultura, alrededor de la cual y en relación con la cual se han edificado múltiples vasos comunicantes socioeconómicos, materiales y de subjetividad en la provincia, que han venido garantizando la vida sociopolítica y cultural, su recomposición y reproducción a lo largo del siglo anterior, con alteraciones y contradicciones internas, indudablemente, que no han alterado la lógica esencial de esta formación social.

La actividad agropecuaria articulada se desarrolla en una extensa área agrícola de 17,580

hás. de tierra de buena calidad con posibilidades de integrar 138,900 hás. más del área de pampas eriazas, siempre y cuando se produzca una efectiva actividad público-privada de inversión en proyectos estratégicos de irrigación y desarrollo agropecuario. En este enorme y bello manto verde agrícola costanero se produce una variedad de bienes para el consumo poblacional y la industria como por ejemplo: arroz, papa, ajo, camote, cebolla, maíz amarillo, olivo, caña de azúcar, ají, tomate, páprika, zapallo; frutas como el higo, plátano, pacay, granada, melón y sandía. Existe igualmente una importante producción pecuaria y lechera (Mejía, Punta de Bombón) especialmente en cuanto al ganado bovino y una producción avícola moderna en acelerado crecimiento y demanda macroregional. Yendo a lo más diverso de la formación social, la actividad económica se pluraliza con la actividad pesquera cuyo motor se encuentra en el distrito de Islay (Matarani) con una pesca artesanal y de altura; a lo que se suma una intensa actividad en el campo del comercio, construcción civil, los servicios, las finanzas y el turismo con especial énfasis en la época de verano. Todo ello, como se ha indicado, articulado contingentemente por la actividad agrícola en razón a los siguientes factores: el valle (Cocachacra, Dean Valdivia, La Punta de Bombón, Mejía) demanda una variedad de bienes y servicios del industrialismo, el comercio y las finanzas, provenientes de una pequeña y mediana burguesía agraria, clase media y asalariado rural que se reproducen en el juego de la ley del valor capitalista (oferta y demanda, acumulación, excedentes de valor, circulación del capital); como también oferta de bienes agropecuarios, como los señalados más arriba, que van hacia los mercados distritales grandes y pequeños. Dentro de los grandes destacan Mollendo y Matarani y dentro de los pequeños una variada red de pequeños establecimientos (Cocachacra, Dean Valdivia, La Curva, Mejía) y vendedores micro que se desplazan por las calles y plazas de las ciudades menores y

poblados. No está demás indicar, también, que algunos productos agrícolas del valle, como la papa, el ajo, la cebolla, el ají y otros, tienen salida hacia otros espacios del ámbito macroregional (Arequipa, Moquegua, Ilo, Tacna).

La articulación significa, en este caso, una relación transaccional material, abierta y subjetiva. Subjetiva porque implica creencias, deseos y valores manifestados en un discurso identitario compuesto por significantes dominantes («agro sí, mina no», la «contaminación del valle») que por su frescura, dinamismo y potencia relaciona otros discursos (modernización, «progreso») en una cadena de significados ordenadores que mueven directa o indirectamente la voluntad de la mayor parte de personas. Este discurso ha sido construido a lo largo de muchos años en la praxis de los sujetos sociales que al tener una posición estructural determinada (pequeños y medianos propietarios o burguesía agraria) han confluído en una forma activa y compartida de entender su propia realidad («posición de sujeto») a la que han logrado convertir también en la forma de entender su realidad de las otras categorías sociales (asalariados rurales, clase media, comerciantes). En otras palabras, han logrado exitosamente un «universalismo» local como la base de una hegemonía provinciana virtuosa, con sus propios horizontes de cambio en el marco de las posibilidades y limitaciones del crecimiento capitalista periférico en el Perú. Es esta hegemonía provinciana a la que se está enfrentando el monopolio minero de la Southern Copper Corporation con el apoyo del Estado, buscando quebrar la lógica de su todo social desde una unidad externa (el proyecto minero) antagónica al espacio interno de la formación social.

Abundando más, la estructura de la formación social de esta parte del país (la provincia) es una estructura cuyas relaciones sociales de producción se desenvuelven en la lógica del

capitalismo global oligopólico que se implanta y modifica en el Perú marginalizado en la relación mundial, a través de dos grandes mediaciones: la mediación nacional y la mediación subnacional (Región Arequipa); cada una de las cuales consigna, en este proceso, sus propias particularidades económicas, sociales, políticas, culturales e institucionales, proyectadas tendencial, subordinantemente y con muchas contradicciones hacia la provincia de Islay, donde se combinan y refuerzan desigualmente con los elementos estructurales de la misma, dando lugar a una composición social clasista y no clasista mayoritariamente de pequeños propietarios en el campo de la agricultura o pequeña burguesía rural propietaria de hectáreas de tierra de buena calidad en un número variables (4 a 10 aproximadamente), que contrata mano de obra asalariada organizada en cuadrillas donde participan tanto el padre, como la madre y los hijos mayores. Las cuadrillas organizan la oferta laboral, negocian el salario y se movilizan en coyunturas especiales, como la actual de resistencia a la intromisión del proyecto minero, de una manera planificada y organizada. Los asalariados originalmente han provenido de las partes altas de Arequipa o de otras regiones como Puno y Moquegua y movilizan con ellos toda una subjetividad ancestral y cultural que acompaña su reproducción material individual, familiar y colectiva, pero también (cuando la ocasión lo amerita) resistencial que en lo físico coercitivo ponen en juego en los enfrentamientos con la policía el uso de la piedra y la huaraca y toda una simbología de autodefensa que se ha venido construyendo con los denominados «espartambos» jóvenes de la autodefensa popular preparados física, técnica y simbólicamente para el enfrentamiento con la policía nacional.

La relación burguesía rural-asalariados es una relación inmanente, contingente y equivalencial construida alrededor de significantes que garantizan homogeneidad y cohesión a las

demandas de la colectividad plural valledina. El significativo privilegiado, en esta ocasión, es el significativo de la «contaminación del valle» y la pérdida del trabajo original por efectos de la actividad minera que la Southern quiere imponer por sobre la consulta popular. Este significativo articula otros con los cuales organiza una cadena de significantes de movilización popular, como es el caso de la desconfianza sobre la calidad ética de la empresa minera, la corrupción en el Estado y el trastocamiento radical de la forma de vida de la población. Añadido a ello está la psicología particular del poblador dotada de una fuerte dosis de autonomía y libertad en sus decisiones personal-familiares particularmente económicas, que no desean perder al quedar aherrojados salarialmente a una mina de la cual depender salarialmente sin un proyecto seguro de vida futura. El número de puestos de trabajo fijos que ofrece la mina no podría atender a la inmensa mayoría de jóvenes en condiciones de laborar actualmente, sin tener en cuenta a la población adulta de hombres y mujeres. La información constante sobre los efectos dañinos de la minería en otras regiones del país y el comportamiento débil del Estado frente al gran capital minero así como los antecedentes negativos de la Southern acentúan la deteriorada percepción de la población sobre ésta.

Como la formación social es una «totalidad de orden simbólico no cerrado» (no explicable en su totalidad y definitivamente), se abre el espacio para el discurso plural proveniente de diferentes actores sociales y políticos tanto de la derecha política, del centro político, del progresismo, como del diletantismo y el nihilismo que se confrontan pero también se perfilan y enriquecen mutuamente; de la sociedad civil como del Estado; en lo privado y en lo público; en el intercambio de ideas como en la «acción directa». Discursos todos enfrentados o complementados sobre el horizonte de «desarrollo» de la provincia o, como en la problemática de la coyuntura, si el proyecto

minero de la Southern Copper Corporation «va» o «no va»; si procede la Licencia de Construcción otorgada por el gobierno del Presidente Vizcarra o no procede, con el trasfondo de una movilización consistente y permanente de la población del valle, paros y huelgas indefinidas que han contaminado prácticamente a todo el Sur del país. Como los discursos son una forma de constitución práctica de lo social, su control, dominio, hegemonía y reafirmación son importantes en el antagonismo «agricultura o minería». La reafirmación del discurso afirmativo del «agro sí mina no» tiene, en este sentido, diferentes escenarios y mecanismos: los escenarios provincial y nacional. El escenario provincial corresponde al juego mediático de determinados medios de comunicación radial, televisivos y escritos por donde fluye una narrativa nihilista y descalificadora de toda acción pro-minería del Estado y particulares, focalizada en hechos y datos epidérmicos muchas veces sin sustancia racional. En este escenario se encuentran también el espacio institucional de los municipios distritales donde, a diferencia del espacio popular, el manejo del conflicto tiene un sentido de autoridad y racionalidad formal-legal, en razón a lo cual los alcaldes se han constituido en reales y potenciales actores de intermediación entre el pueblo en protesta-demanda y el Estado; y el escenario popular donde la reafirmación del discurso «agro sí mina no» es una reafirmación directa del discurso y la constitución permanente de los sujetos sociales. Físicamente el escenario popular reafirmativo se efectúa todos los días en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra donde, a partir de las 11 a.m., convergen cientos de pobladores para deliberar sobre la situación de la huelga y tomar decisiones. En cuanto a la reafirmación del discurso en el escenario nacional, o más allá de lo provincial, se encuentra principalmente la ciudad de Arequipa y espacios económico-sociales como La Joya, El Pedregal y otros que han sido durante estos días importantes actores en la movilización

social regional de apoyo a la población valledina de Islay; medios de comunicación en la ciudad de Arequipa; activistas gremiales y populares de esta ciudad (Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Sindicato de Construcción Civil SUTEP, etc.), personalidades progresistas y críticos radicales; y congresistas particularmente del Frente Amplio que se han venido desplazando regularmente hasta la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra ratificando y densificando las ideas centrales de un pensamiento medioambientalista que garantice la vida de las personas y el desarrollo integral del país con garantía de supervivencia para las generaciones futuras.

En cuanto a los mecanismos de reafirmación del discurso «agro sí mina no» existen los mecanismos subterráneos del pensamiento que se distribuye de boca a boca en los encuentros ocasionales, los mercados, las plazas y parques y los grupos que se movilizan diariamente en unidades de servicio público del valle a la ciudad de Mollendo, Matarani o Arequipa; las festividades cívicas o religiosas; los encuentros concertados en Cocachacra, Mollendo y Matarani; las movilizaciones permanentes y los enfrentamientos con la policía; la interacción laboral en el campo y otros escenarios más de interacción social cotidianos; están igualmente los mecanismos de la prensa escrita, hablada y televisiva. La prensa radial tiene la particularidad de abrir sus espacios para el hablar directo de la población que defiende el «agro sí mina no» con su propio lenguaje y poniendo en juego un sinfín de subjetividades y micro-discursos, unos más informados que otros, que ingresan en la totalidad discursiva identitaria alimentando información y, sobre todo, emotividad y ética; al mismo tiempo que se construye y reconstruye críticamente el sujeto político provincial.

El valle como unidad equivalencial ha producido una cadena de equivalencias que va más allá de

Islay, compuesta por diferentes particularidades económicas, sociales, culturales y políticas que se articulan en un momento horizontal, bajo un principio esencial que vincula al todo: el significante «contaminación», la «defensa del medio ambiente» y la corrupción pública y privada. Este significante privilegiado ha logrado engranar otros significantes en las subregiones del Sur del Perú por dos condiciones importantes: el discurso medioambientalista expandido en el mundo contemporáneo con bases reales y científicas: la contaminación efectuada por el capitalismo monopolístico «generalizado» (Samir Amin) y sus consecuencias destructivas para la salud de la gente y la posibilidad de vida futura en la tierra. Algo que prácticamente ya estamos experimentando en el cambio climático, los deshielos de las grandes montañas, el debilitamiento de la capa de ozono, la desertificación, los incendios forestales y otros. La otra condición para este engranaje se encuentra en la experiencia cercana de la explotación minera en las otras subregiones (Quellaveco y Cuajone en Moquegua, Cerro Verde en Arequipa y algunas minas menores en la Región Puno) con desenlaces, igualmente, de protesta y movilización social. A todo lo cual se añaden significantes de otra factura como es el caso del empleo, la salud, la seguridad social y obras de infraestructura o, más políticos, como la liberación del gobernante Walter Aduviri encarcelado por razones de protesta social con destrozos en la ciudad de Puno años atrás.

La sociedad civil es una dimensión muy importante de la formación social en general y, particularmente, en la provincia de Islay. Entendida como el ámbito donde se edifica activamente la conciencia social de los seres humanos, la ideología, las formas de pensar y el sentido de ciudadanía con deberes y derechos, amén de la libertad personal en la decisión comportamental de los individuos. Su formación no es homogénea por la diversidad material,

subjetiva y cultural de los sujetos sociales de la provincia con diferentes experiencias vitales y laborales; por la debilidad de los «aparatos ideológicos del Estado» (educación, cultura) y de la propia sociedad civil, y por la predominancia, en términos generales de escisiones o fracturas en el tejido social consecuencia de las política neoliberales y su influencia atomizante ratificada por el mercado económico. Existe, entonces, una sociedad civil en diferentes niveles de formación que se traduce en diferentes formas de relación con el Estado y sus instituciones, los partidos políticos y con los actores de la vida urbana.

Esta relacionalidad plural de la sociedad civil provincial y en especial de los sujetos protestantes del valle, en situaciones contradictorias como el aceptar el ordenamiento legal al mismo tiempo que se lo niega, convenir en una situación de diálogo con el gobierno y después rechazarlo. Se acepta el ingreso a la tramitación legal con sus mecanismos, formas y tiempos como, por ejemplo, en el trámite oposicional a la Licencia de Construcción otorgada por el gobierno del ing. Vizcarra a la empresa minera, al mismo tiempo que en el proceso de este trámite reverbera una posición más radical: «que se vaya la mina», más allá de los resultados del trámite anteriormente señalado. En situaciones donde se abrieron algunos pequeños espacios para el diálogo, en el contexto de la huelga general indefinida tanto en Cocachacra como en Matarani (centro virulento del enfrentamiento de los protestantes con la policía), se hallaban presentes los actores del diálogo de la parte gobierno pero del otro lado sólo estaban los «autoconvocados», produciéndose un «diálogo» entre un o unos sujetos individuales y una multitud que al final era un no-diálogo improductivo. Como la sociedad civil y la sociedad política (coerción, uso de la fuerza, violencia) están unidas por un cordón umbilical muy tenue y sólo hay sociedad civil (dirección, consenso) cuando la coerción

se somete a esta última; el desarrollo desigual de la sociedad civil en la provincia de Islay ha posibilitado dos cuestiones gravitantes: una primera, la toma de carreteras (Fiscal y Matarani en lo provincial) y el intento de su posesión indefinida por los huelguistas con el resultado de enfrentamientos violentos con el cuerpo policial, bajo la exigencia de que la mina simplemente se retire de la provincia y la negación al diálogo con el Gobierno Central; situación en la cual la sociedad civil cedió a la coerción o fue rebasada por la sociedad política en un proceso que se ha venido incrementando gradualmente, al mismo tiempo que los mecanismos de hegemonía o dirección de la población del valle en protesta se han venido ralentizando conforme transcurren los días sin una solución negociada y apropiada a la vista.

La irrupción de la coerción (violencia física, intervención disciplinaria de lo público) en el escenario del conflicto responde, así, al agotamiento acumulativo de los mecanismos de consenso para arribar a una solución (diálogo autoridades provinciales-Gobierno Central, gobierno de la Región Arequipa- Gobierno Central), cuando en los límites de la objetividad de los antagonismos los factores de desordenación de estos límites comienzan a sobreponerse sobre los factores de su ordenamiento racional. Desordenación en la cual la gestión del conflicto de los funcionarios de la Southern y del Gobierno Central ha sido la columna vertebral de este desordenamiento en su forma de implosión violentista. En el caso de la empresa minera por la forma contradictoria como ha manejado su actuación en el conflicto con la población del valle de Tambo (Estudio de Impacto Ambiental sumamente observable, medias verdades, paternalismo y despotismo en el tratamiento de la población), y en el caso del Gobierno Central generalizado a todo lo que significa el Estado nacional (unificación de la burguesía), un acendrado apego fetichista a la formalidad y legalidad del proceso sin tener en

cuenta su profunda trama política y social con el transfondo de una inocultable presión del grupo económico-político conservador (CONFIEP como caso emblemático) porque se haga uso del «principio de autoridad» por parte del Gobierno Central que no es sino el uso de la fuerza.

La mina y el Estado pretenden reconstituir el campo social conflictuado y los sujetos sociales en interés de la explotación minera de una manera impositiva asumiendo un discurso esencialista, definitorio y de estructura centrada bajo la cobertura de los «científico» y lo «técnico». En esta realidad, el sujeto colectivo agrario no encuentra posibilidades de cambio con las equivalencias articuladoras ofrecidas por el capital monopólico y el Estado, lo que hace imposible la sutura del espacio social en esta coyuntura. Las equivalencias articuladoras no convences, por ejemplo, en cuanto a la contaminación del agro y el mar. Si el «cierre» de la coyuntura se impone en el futuro por la vía de la violencia oficial y la imposición legal es un falso «cierre» que no hará sino esconder transitoriamente la implosión de nuevas revulsiones.

La Southern Copper/Southern Perú es parte constituyente de uno de los cinco grandes monopolios mundiales del centro capitalista dominante, el monopolio del acceso a los recursos naturales del globo mediante el cual se transporta grandes masas de plusvalía transformada en ganancia fruto de la explotación del trabajo, al centro capitalista, privando de autonomía e ingresos reales a la periferia y sobre todo a los pequeños productores. En esta lógica rentista los valores éticos no cuentan al haber sido reemplazados por un «sistema sin valores éticos» (Samir Amin) donde juegan un papel central la iniciativa individual, el respeto a la ley, el «progreso», etc. que acompañan la dimensión desposesionaria y destructiva de la acumulación del capital, la polarización

excluyente, la desintegración nacional y la destrucción de los medios de vida naturales, con un Estado nacional que claudica en sus funciones reguladoras. Las condiciones de competencia del capitalismo mundial se han modificado porque la competencia se ha vuelto mundial y el gran capital se ha convertido hoy en un factor de causalidad de lo nacional convertido en parte de una geoestrategia internacional donde los recursos naturales sirven para el posicionamiento geográfico y geopolítico de las potencias capitalistas en el mundo.

El conflicto Tía María/La Tapada debe ser analizado, en consecuencia, como parte de esta trama global de circuitos económicos y subjetivos creados por el capitalismo en su última fase globalizadora (la globalización neoliberal), y como manifestación concreta de una realidad nacional y subnacional de dominio del gran capital monopólico mundial que ordena y desordena los espacios de inversión en la línea exigencial de sus propios intereses de acumulación con inclusión de fórmulas desposesionarias de los recursos (tierra, agua, flora, fauna) en manos de las poblaciones locales, con la participación activa y sumisa de un Estado nacional cuyo patrón de crecimiento ha sido acondicionado para reproducirse haciendo uso de una Caja Fiscal dependiente; en gran medida, de la gran inversión minera. La resistencia de la población valledina, siendo así, es una resistencia en stricto sensu no sólo contra una fracción local del gran monopolio capitalista mundial de los recursos naturales sino contra el monopolio en su conjunto; contra toda la racionalidad económica del capitalismo global que busca imponerse autoritariamente en la periferia.

En consecuencia, el conflicto Tía María es una confrontación de racionalidades, de la racionalidad del gran capital (extractivista, desposesionario, derrochador, polarizante) con la racionalidad local de una población que quiere

reproducir y mejorar sus condiciones de existencia con autonomía, libertad decisional, autogestión, integración subjetiva y material, servicios sociales, democracia plural e instituciones públicas de calidad. En contrapartida la mina busca introducir nuevas figuras de la subjetividad: progreso, modernización, empleo, etc alterando la estructura articuladora estable del valle y la provincia en un proceso donde la lógica de composición social podría ser dislocada y revertirá irremisiblemente por acción de la mina y el Estado.

IV. CONCLUSIONES:

La resistencia de la población valledina de la provincia de Islay (Cocacharcra, Dean Valdivia y Punta de Bombón principalmente) constituye la manifestación revulsiva de un conjunto de factores entrelazados de la formación social local, donde el eje ordenador del todo social complejo lo constituye la actividad agrícola. En consecuencia no es posible entender la dinámica subterránea de esta realidad apelando únicamente a los instrumentos cognoscitivos del positivismo dominantes en el tejido argumentativo del Estado y la empresa minera.

La teoría crítica y una serie de orientaciones no esencialistas en el entendimiento de lo social brindan, en su combinatoria, importantes posibilidades cognoscitivas y operativas para encontrar la morfología subyacente en la historia del conflicto social entre la población del valle de la provincia de Islay y la Southern y el Estado peruano; y por este camino encontrar alternativas creativas, novedosas y estratégicas para la solución del conflicto.

El conflicto social en el valle de la provincia de Islay tiene dos dimensiones: la dimensión del consenso en la sociedad civil heterogénea y la dimensión de la coerción (violencia) en la dimensión sociedad política resumida en el

Estado. En la medida en que la dimensión del consenso global en la sociedad civil provincial hegemonizada contestatariamente por el Estado apelando a la ideología formal del derecho y la ciudadanía, ha venido perdiendo consistencia por errores de los «bloques» de actores enfrentados, pero especialmente de la empresa minera y el Estado, se ha ingresado a un desordenamiento político con violencia material cuya única salida está en la recuperación de la racionalidad dialogal con final abierto y consecuencias aceptadas por ambas partes.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- Asociación Civil Labor (2015) Informe inquietudes y preocupaciones de la población de la Provincia de Islay, respecto al EIA del Proyecto Minero Tía María de Southern Perú Copper Corporation, Arequipa,
- Basombrío, Carlos et al. (2016). Conflictos sociales en el Perú (2008-2015). Konrad Adenahuer Stiftung y Wilson Center Latina American Program.
- Gustavo, Patricio Gille (2017). Tesis, La constitución de las subjetividades políticas en la teoría de Ernesto Laclau. De la articulación hegemónica a la conformación del pueblo. Universidad de Buenos Aires.
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Siglo XXI. Madrid.
- Lechner, Norbert (1984). la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. FLACSO. Santiago de Chile.

- Lechner, Norbert (2016). Cultura política y gobernabilidad democrática. Instituto Nacional Electoral. México.
- Municipalidad Provincial Islay. Plan Estratégico de Desarrollo Concertado al 2021 revisado, actualizado y validado en el taller de presupuesto participativo 2,010.
- Poulantzas, Nico (s/f). Crítica de la hegemonía del Estado. Antigua casa editorial Cuervo. Buenos Aires.
- Portelli, Hugues (1977). Gramsci y el bloque histórico. XXI siglo veintiuno editores. México.
- Samir Amin. Capitalismo, imperialismo, mundialización en www.ehu.es
Samir Amin capitalismo imperialismo mundialización
- Kohan, Néstor (s/f). Hegemonía y poder en la teoría marxista. Cátedra Libre Antonio Gramsci. Universidad de Buenos Aires/ <http://www.rebelion.org/izquierda/kohan170301.htm>